

«Hay que pasar de la beneficencia a los derechos de las personas»

ALFONSO VICENTE

Presidente de la Fundación Rey Ardid



Alfonso Vicente habla de los retos de la Fundación a corto y medio plazo. RAQUEL LABOÏA

El sector de la discapacidad suele estar escaso de recursos. ¿Qué pide a los Reyes Magos?

Este año me conformaría con que hubiera presupuesto y con que las políticas sociales sigan como hasta ahora, porque pienso que la actual consejera lo está haciendo muy bien. Es que, ¿sabe usted lo que supondría que no tuviéramos presupuesto?

Creo que usted me lo explicará mejor...

Sería un desastre, porque esto supone que se prorroga el anterior presupuesto con la cifra inicial, así que todo lo que se ha ido incrementando, no aparece. Volveríamos a la casilla cero. Y una carretera puede esperar, pero una persona muy enferma, no.

La Fundación Rey Ardid lleva 25 años trabajando. ¿Cuál es su reto principal actualmente?

Nuestra mayor apuesta es el empleo de los más necesitados, porque si una persona tiene trabajo, también es más fácil su integra-

ción. Hay que pasar de la beneficencia a los derechos. Aún hay gente que asocia este sector con la caridad, pero la gente tiene derecho a trabajar y a integrarse.

¿Y se consigue?

El 80% de las personas con discapacidad o en riesgo de inclusión de Aragón no tiene trabajo. Nosotros buscamos nichos de empleo y nuestra empresa social tiene a casi 200 trabajadores.

¿Por qué es tan difícil la integración? ¿Es un problema de capacidad o de estigma?

Hay una parte fundamental de estigma. En Aragón hay muchas empresas colaborando con nosotros que ven que estas personas cumplen, pero cuesta. Es la responsabilidad social corporativa y unos la entienden más que otros. Algunos solo buscan el rendimiento económico y se olvidan del social. Nuestro papel es el contrario: no repartimos dividendos; intentamos dar salidas.

EL PERSONAJE

El ex consejero de la DGA Alfonso Vicente (San Juan de Mozarrifar, 1953) preside la Fundación Rey Ardid desde hace 17 años

Además, incluso han logrado autofinanciarse en buena medida.

Nuestro objetivo es depender cada vez menos de las administraciones públicas. Estas deben tener sensibilidad y apoyar económicamente a los sectores más desfavorecidos, pero cuando hay una época económica dura, se pasa mal. Ahora mismo, nuestros ingresos propios suponen un 60%.

¿Cómo lo han conseguido?

Orientando la ONG a tener otros

recursos. Por ejemplo, la residencia de Juslibol es propia y tenemos beneficios directos que repartimos entre otros centros deficitarios. También llevamos residencias de particulares y hemos ganado el concurso para gestionar un centro de referencia nacional del Imsero, dependiente del Ministerio, en Valencia, de enfermedad mental grave.

Un fondo de inversión ruso se ha interesado en ustedes.

Es anecdótico, pero es cierto que hemos recibido propuestas de compra, cuando es imposible, porque una ONG no se puede vender. Pero al ver los resultados y el volumen de negocio, un fondo ruso lo intentó.

Todo el mundo tiene un precio... (Ríe). Nosotros, no.

¿Hay que estar hecho de otra pasta para trabajar en este sector?

Nuestro principal activo son nuestros trabajadores. Todos los trabajos son duros, pero en este, la carga emocional es grande, la empatía es muy necesaria y lo sueltos en el sector son bajos.

¿Qué le parece la nueva política de concertaciones de la DGA?

Es pionera y valiente. Busca primar la calidad frente a lo económico y permitir que si una ONG gestiona un centro con calidad, pueda contratar el servicio directamente.

Vamos, que reduce burocracia.

Y sobre todo evita que una ONG que busca repartir otros valores no compita con una empresa que viene a ganar dinero.

LARA COTERA